El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

**TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / RECALIFICACIÓN / PROCEDENCIA DE LA TUTELA / PUEDE SER ANTES DE TRANSCURRIR UN AÑO / DEBE PREVALECER CONDICIÓN REAL DE SALUD / NO EXISTE PROHIBICIÓN EXPRESA AL RESPECTO.**

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley…

… la queja constitucional se planteó contra Colpensiones al no brindar la posibilidad de contradecir la respuesta emitida frente a la solicitud de recalificación médica laboral ni tener en cuenta que, debido a tardanzas propias de esa entidad, existen nuevos diagnósticos que dejaron de ser valorados en el primer trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral…

… esta Sala analizó lo relativo al presupuesto de que se trata de la siguiente manera:

“Frente al examen de procedibilidad de la acción de tutela, es importante reiterar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela es menos rigurosa frente a los sujetos de especial protección constitucional, como lo son los niños, las personas de la tercera edad, personas en condición de discapacidad, entre otros, por su situación de debilidad manifiesta…”

… la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones le informó al afiliado que no era posible continuar con el trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral como quiera que “cuenta con dictamen menor de un año” …

… se acudirá nuevamente al precedente horizontal sentado en caso que por su similitud con el presente, merece la atención de la Sala. En esa ocasión este Tribunal expresó:

“… En resumen, al no existir norma expresa sobre la prohibición de recalificación con anterioridad a un año contado desde el primer dictamen médico laboral, y teniendo en cuenta el principio jurisprudencial según el cual debe prevalecer en estos casos la necesidad de dictaminar la real condición de salud, pues existe evidencia de que luego de la primera calificación del actor se le diagnosticaron enfermedades distintas a las que fueron allí objeto de valoración, se puede concluir que Colpensiones no podía exigir se aguardara un año para poder solicitar la nueva calificación médico laboral y que en consecuencia lesionó el derecho a la seguridad social del demandante al obstruir injustificadamente un trámite necesario para definir la situación médico laboral del accionante”

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL**

**PEREIRA - RISARALDA**

**SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA**

Magistrado Sustanciador: Carlos Mauricio García Barajas

**Pereira, tres (03) de octubre de dos mil veintidós (2022)**

Acta número: 489 de 03-10-2022

Sentencia: ST2-0359-2022

**ASUNTO**

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 04 de agosto pasado, dentro de la acción de tutela que promovió el señor Juan Diego Rodas Pérez contra Colpensiones, trámite al que fueron vinculados el Presidente, el Gerente de Determinación de Derechos, la Directora de Medicina Laboral, el Director de Atención y Servicios de esa misma entidad, así como la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.

**ANTECEDENTES**

**1.** Del escrito de tutela se advierte que el 09 de marzo de 2022, el actor elevó solicitud ante Colpensiones para obtener se revisara su calificación de pérdida de la capacidad laboral, llevada a cabo el 21 de octubre de 2019, teniendo en cuenta que padece enfermedades permanentes, progresivas e irreversibles. En respuesta le informaron que esa petición era improcedente pues no ha transcurrido un año desde la emisión del dictamen médico laboral, empero no se concedió la posibilidad de interponer recursos de ley.

Explicó que “han transcurrido más de treinta y tres (33) meses, desde que el accionante, fue evaluado en forma provisional por patologías progresivas”, diagnósticos que actualizados comprenden: tumor maligno, hipoacusia neurosensorial bilateral, fibromialgia, síndrome del manguito rotador, gastritis no especificada, trastorno depresivo recurrente no especificado, trastorno de adaptación, trastorno cognitivo leve, artritis primaria generalizada, apnea del sueño, diabetes mellitus, gonoartrosis primaria bilateral, mialgia, neurología postherpes, perbicia, fractura de peroné y dolor crónico. Finalmente, que “fue remitido por medicina laboral, para calificación de pérdida de capacidad laboral por CONCEPTO NO FAVORABLE DE REHABILITACION (sic) LABORAL”

Para obtener la protección a sus derechos al debido proceso y de petición, solicita se ordene a la demandada resolver de fondo la reclamación formulada[[1]](#footnote-2).

**2. Trámite:** Por auto del 22 de julio pasado, el juzgado de primera instancia admitió la acción constitucional.

Colpensiones se pronunció para manifestar que en este asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, como quiera que la solicitud formulada por el actor el 09 de marzo de 2022, fue atendida mediante oficio del 17 de ese mismo mes en el que se le informó que no era posible continuar con el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral, toda vez que él cuenta “con dictamen menor de un año”. Explicó frente a ello que el dictamen definitivo, emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, data del 10 de septiembre de 2021.

De otro lado refirió que como en este caso concurren otros medios de defensa judicial, el amparo resulta improcedente, máxime que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable[[2]](#footnote-3).

**3. Sentencia impugnada:** En providencia del 04 de agosto último, el juzgado de conocimiento negó la protección rogada tras considerar que la respuesta suministrada por Colpensiones resuelve de manera clara y de fondo el asunto, sin que la decisión allí adoptada merezca reproche alguno, pues de conformidad con el Decreto 1507 de 2014, la periodicidad de la revisión de calificaciones médico laborales es de mínimo doce meses[[3]](#footnote-4).

**4. Impugnación:** La parte actora insistió en que Colpensiones transgredió los derechos invocados al omitir establecer los recursos que por la vía administrativa procedían contra la respuesta brindada a la petición y extender injustificadamente los términos del procedimiento de calificación de invalidez, pues a pesar de que el primer dictamen médico laboral fue emitido el 21 de Octubre de 2019, permaneció varios años sin definirse sobre los reparos planteados en su contra, demora adjudicable a Colpensiones por dilatar el pago de los honorarios de las Juntas de Invalidez, lo que significó que un procedimiento que debía durar un mes, se prolongó casi por tres años. En tanto sus padecimientos se agravaron y surgieron nuevos diagnósticos que no fueron revisados en aquella oportunidad, lo que hace posible llevar a cabo una nueva valoración, antes de cumplirse los doce meses de realizada la última[[4]](#footnote-5).

**CONSIDERACIONES**

**1.** El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable (art. 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991).

**2.** En el caso concreto la queja constitucional se planteó contra Colpensiones al no brindar la posibilidad de contradecir la respuesta emitida frente a la solicitud de recalificación médica laboral ni tener en cuenta que, debido a tardanzas propias de esa entidad, existen nuevos diagnósticos que dejaron de ser valorados en el primer trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Frente a esa situación, el juzgado accionado consideró que la respuesta brindada por esa administradora de pensiones, además de ser clara y de fondo, se ajusta al ordenamiento legal que establece que para poder tramitar un segundo dictamen de aquella naturaleza, es pertinente que desde la emisión del primero haya transcurrido más de un año.

De conformidad con lo anterior, el problema jurídico consiste en determinar si resulta procedente la acción de amparo para dirimir tal controversia y, en caso positivo, si Colpensiones lesionó los derechos fundamentales del demandante.

**3.** El señor Juan Diego Rodas Pérez está legitimado en la causa por activa, al ser la persona a quien se negó un nuevo trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. También está legitimada por pasiva Colpensiones, por intermedio de su Directora de Medicina Laboral, como autoridad que adoptó la decisión criticada.

Frente al Presidente, el Gerente de Determinación de Derechos, el Director de Atención y Servicios de Colpensiones y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, encuentra la Sala que fueron vinculados de manera aparente a la actuación, pues no se evidencia que en la demanda se les haya imputado alguna acción u omisión que afecte las garantías fundamentales del accionante, ni aparece acreditada la misma, de manera que contra ellas el amparo resulta improcedente.

**4.** En punto del análisis de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, se advierte que la decisión en que encuentra el actor lesionados sus derechos, es decir aquella por medio de la cual se negó su solicitud de recalificación, se profirió el 17 de marzo de este año[[5]](#footnote-6). Desde esa época a la fecha de presentación del libelo (21 de julio siguiente[[6]](#footnote-7)) no transcurrió más del término de seis meses, considerado como razonable para ejercer la solicitud de amparo, por lo que se considera satisfecho el presupuesto de inmediatez.

Respecto a la subsidiariedad es menester precisar de entrada que el actor no controvierte el resultado de la pérdida de capacidad laboral, ni reclama se le reconozca una pensión de invalidez, sobre la cual apenas le asiste alguna expectativa. Lo que en realidad controvierte es la determinación de Colpensiones de negarse a tramitar un nuevo procedimiento de calificación médico legal, a pesar de existir, según alega, unas nuevas condiciones de salud que, por lo mismo, no pudieron ser analizadas en la primera valoración.

En un caso de similares contornos, esta Sala analizó lo relativo al presupuesto de que se trata de la siguiente manera:

*“4. Para dilucidar el primero de los problemas jurídicos planteados, es necesario citar la jurisprudencia constitucional que ha tratado lo relativo a la procedencia del amparo para obtener la calificación de pérdida de la capacidad laboral:*

*“Frente al examen de procedibilidad de la acción de tutela, es importante reiterar que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela es menos rigurosa frente a los sujetos de especial protección constitucional, como lo son los niños, las personas de la tercera edad, personas en condición de discapacidad, entre otros, por su situación de debilidad manifiesta.*

*…*

*Por consiguiente y en fundamento de lo anterior, la Sala considera que la definición inmediata sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del accionante se muestra como una medida urgente, puesto que de esta misma depende la procedencia de la solicitud de la indemnización por incapacidad permanente… Esta circunstancia, sumada a las condiciones de salud del accionante, al igual que su situación de discapacidad, exige un procedimiento judicial expedito para la protección de sus derechos fundamentales.”[[7]](#footnote-8)*

*En el caso particular, el señor Jesús Quintero Grisales fue dictaminado con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 46,94%, con sustento en sus diagnósticos de gonartrosis, hipertensión arterial, insuficiencia venosa, trastorno de adaptación y apnea del sueño[[8]](#footnote-9), suceso que lo ubica en una esfera prevalente, pues aunque su calificación no supera el límite determinado por el legislador para ser considerado en situación de discapacidad, lo cierto es que se aproxima bastante a él y por ello se hace necesario agotar el trámite de la nueva calificación médico legal para poder establecer si podría llegar a ser considerado como de la población discapacitada. A ello cabe agregar que por aquellas particulares circunstancias, no es posible someterlo a los trámites propios de un proceso ordinario, solo para que se resuelva si Colpensiones está obligada o no a practicar una nueva valoración de pérdida de la capacidad laboral.”[[9]](#footnote-10)*

En esas condiciones, considera esta instancia que resulta desproporcionado obligar al accionante a acudir a un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social para reclamar simplemente su derecho a la práctica del nuevo dictamen de invalidez, cuando está acreditado que ha sido diagnosticado con artrosis primaria generalizada, apnea del sueño, diabetes mellitus, gastritis no especificada, gonartrosis primaria, hipoacusia neurosensorial, mialgia, fibromialgia, neuralgia postherpes zister, presbicia, síndrome de manguito rotatorio bilateral, trastorno cognoscitivo leve y trastorno depresivo recurrente, cuadro clínico que llevó a otorgarle una pérdida de la capacidad laboral del 43,54%[[10]](#footnote-11), porcentaje que eventualmente puede ser incrementado a más del mínimo exigido para ser considerado como inválido, lo que avalaría, por demás, uno de los presupuestos para acceder a la pensión vitalicia correspondiente.

Por tanto y en aplicación del precedente horizontal, se pueden tener por colmados los presupuestos de procedibilidad del amparo, circunstancia que permite a la Sala entrar a analizar el fondo del asunto.

**5.** Las pruebas allegadas al expediente acreditan los siguientes hechos de interés para el asunto:

**5.1.** Mediante dictamen del 10 de septiembre de 2021, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó que la pérdida de la capacidad laboral del accionante ascendía a 43,54%, con un origen común y con fundamento en las enfermedades de artrosis primaria generalizada, apnea del sueño, diabetes mellitus, fractura de peroné, gastritis no especificada, gonartrosis primaria, hipoacusia neurosensorial, mialgia, fibromialgia, neuralgia postherpes zister, presbicia, síndrome de manguito rotatorio bilateral, trastorno cognoscitivo leve y trastorno depresivo recurrente, las cuales fueron diagnosticadas entre los años 2014 a 2020[[11]](#footnote-12).

**5.2.** El 09 de marzo de 2022, el accionante solicitó a Colpensiones se adelantara una nueva calificación médico laboral[[12]](#footnote-13).

**5.3.** Por oficio del 17 de ese mismo mes, la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones le informó al afiliado que no era posible continuar con el trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral como quiera que “cuenta con dictamen menor de un año”[[13]](#footnote-14).

**5.4.** Según la historia clínica del demandante, desde el 13 de diciembre de 2021, fue diagnosticado con adenocarcinoma de recto, con progresión hepática, (tumor con compromiso metastático), patología para la cual se encuentra en manejo de quimioterapia y radioterapia[[14]](#footnote-15).

**6.** Con base en lo anterior es pertinente entrar a resolver el problema jurídico que se planteó, esto es, la posibilidad o no de exigir el paso de un año para poder recalificar el estado de invalidez.

Para ese efecto, se acudirá nuevamente al precedente horizontal sentado en caso que por su similitud con el presente, merece la atención de la Sala. En esa ocasión este Tribunal expresó:

*“6. Como ya tuvo la oportunidad de indicarse, el debate propuesto guarda relación sobre la existencia o no de un término para calificar de nuevo la capacidad laboral del afiliado; en el fallo objeto de impugnación, se decantó por la primera de esas posibilidades, es decir que la recalificación de invalidez procede solo luego de transcurrido un año desde la primera valoración médico legal, de acuerdo con el artículo 55 del Decreto 1352 de 2013.*

*7. La Sala no comparte ese argumento por las razones que se pasan a analizar:*

*…*

*Por consiguiente, el derecho a la valoración de la pérdida de capacidad laboral no se encuentra supeditado a un término perentorio para su ejercicio, toda vez que la idoneidad del momento en que el afiliado requiere la definición del estado de invalidez o la determinación del origen de la misma, no depende de un término específico, sino de sus condiciones reales de salud, del grado de evolución de la enfermedad o del proceso de recuperación o rehabilitación suministrado.*

*El mero transcurso del tiempo no obsta el acceso al dictamen técnico que permitirá establecer las prestaciones económicas causadas por el advenimiento del riesgo asegurado, independientemente de que este tenga origen en una enfermedad profesional, accidente laboral o en una afección de origen común.”*

*Significa lo anterior que, cuando se trata de establecer su real condición de salud, no es posible imponer un plazo determinado para calificar la invalidez de los afiliados.*

*7.2 El Decreto 1352 de 2013, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, no prevé expresamente la imposibilidad de recalificar el estatus médico laboral antes de un año transcurrido contado desde la fecha en que se practicó el primer dictamen, sin que lo determinado en el inciso tercero de su artículo 55 sea aplicable al caso ya que esa norma, tal como lo alega la parte recurrente, regula los eventos relacionados con accidentes o enfermedades de origen laboral, así: “En el Sistema General de Riesgos Laborales la revisión de la pérdida de incapacidad permanente parcial por parte de las Juntas será procedente cuando el porcentaje sea inferior al 50% de pérdida de capacidad laboral a solicitud de la Administradora de Riesgos Laborales, los trabajadores o personas interesadas, mínimo al año siguiente de la calificación y siguiendo los procedimientos y términos de tiempo establecidos en el presente decreto...”*

*Lo anterior significa que el periodo de un año a que alude la demandada para negar la posibilidad de iniciar nuevamente el trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, no es aplicable a este caso ya que como quedó acreditado el origen de las enfermedades del actor fue catalogado como común, sin que la norma citada pueda ser interpretada de manera análoga para resolver la presente cuestión, no solo porque los principios que orientan a cada uno de los sistemas, el de pensión y de riesgos laborales, difieren sustancialmente sobre los métodos de calificación y los riesgos asegurables, sino porque acoger dicha hermenéutica perjudicaría al accionante quien, como se dijo, es una persona con amplias posibilidades de ser considerada como de especial protección en razón de su eventual estado de invalidez, lo que iría en contra de las reglas propias que emanan de la Constitución Política sobre el amparo de sujetos en situación de vulnerabilidad.*

*7.4 En resumen, al no existir norma expresa sobre la prohibición de recalificación con anterioridad a un año contado desde el primer dictamen médico laboral, y teniendo en cuenta el principio jurisprudencial según el cual debe prevalecer en estos casos la necesidad de dictaminar la real condición de salud, pues existe evidencia de que luego de la primera calificación del actor se le diagnosticaron enfermedades distintas a las que fueron allí objeto de valoración, se puede concluir que Colpensiones no podía exigir se aguardara un año para poder solicitar la nueva calificación médico laboral y que en consecuencia lesionó el derecho a la seguridad social del demandante al obstruir injustificadamente un trámite necesario para definir la situación médico laboral del accionante” [[15]](#footnote-16).*

**7.** Aplicado este precedente análogo, se concluye que la exigencia impuesta por Colpensiones para poder recalificar al actor carece de sustento legal y desconoce los principios jurisprudenciales sobre la materia.

En efecto, se encuentra acreditado que las enfermedades que padece el accionante y que fueron objeto de valoración por la Junta de Invalidez, fueron catalogadas como comunes, circunstancia que no se encasilla en la hipótesis establecida en el inciso tercero de su artículo 55 del Decreto 1352 de 2013, citado en la jurisprudencia transcrita, pues allí, queda claro, se refiere a eventos relacionados con accidentes o enfermedades de origen laboral.

De igual manera aunque en el Título Primero, capítulo I, del Manual Único para la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, norma a la cual acudió el despacho de primera instancia para definir la cuestión, se establece como periodicidad para revisar la calificación de invalidez el término de doce meses, lo cierto es que allí también se establece de una excepción a esa regla cuando “En caso de patologías adicionales no contempladas en la calificación en firme, debe realizarse nuevamente la calificación con la documentación correspondiente, iniciando el proceso en primera oportunidad, la cual podrá realizarse antes de los doce (12) meses”.

En este caso, se recuerda, la calificación en firme tuvo en cuenta el cuadro clínico presentado por el demandante hasta el año 2020 y fue solo hasta el año subsiguiente, más precisamente a finales del 2021, que se le detectó el tumor maligno de recto, es decir que se cumple la excepción que establece la norma, la cual, valga la pena decirlo, se dirige para pacientes con neoplasias o cáncer, tal como ocurre en este caso.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en virtud a los principios de veracidad e integralidad de la calificación médico legal, no es posible establecer un término perentorio en aras realizar esa valoración, y por ello si en la historia clínica del accionante surgió un diagnóstico que dejó de ser analizado en el dictamen del 10 de septiembre de 2021, es posible reiniciar el trámite correspondiente para valorar de manera íntegra la condición médico laboral del citado señor, sin imponer el requisito del vencimiento de aquel plazo.

**8.** En este estado de cosas, queda al descubierto la lesión a los derechos al debido proceso y la seguridad social por parte de Colpensiones y en consecuencia se impone la necesidad de revocar el fallo impugnado, conceder el amparo constitucional y ordenar a la Directora de Medicina Laboral de ese fondo de pensiones que, en el término de 48 horas, dé trámite a la solicitud de recalificación de la pérdida de la capacidad laboral elevada por el actor, sin realizar aquella exigencia del transcurso del lapso de un año.

**9.** Para finalizar, en relación con el alegato de la parte actora sobre que la demandada no le concedió la posibilidad de recurrir la determinación tantas veces citada, baste indicar que al hallarse el origen de la vulneración en tal forma de decidir y ordenarse en consecuencia la continuación del trámite médico legal, no hace falta pronunciarse sobre ese punto de la demanda. Así actúa la Sala, en ejercicio de las facultades extra y ultra petita que corresponden al juez de tutela, a fin de lograr la real protección de los derechos fundamentales que se encuentran afectados.

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Revocar el fallo de fecha y procedencia anotadas.

**SEGUNDO:** Conceder el amparo a los derechos a la seguridad social y al debido proceso administrativo de que es titular el accionante.

**TERCERO:** Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Directora de Medicina Laboral de ese fondo de pensiones que en un término de 48 horas, contadas desde la notificación que de esta providencia se le realice, proceda a iniciar el trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral del actor, sin exigir el cumplimiento del plazo de un año a partir del dictamen que puso fin a la primera calificación médica laboral.

**CUARTO:** Se declara improcedente el amparo contrael Presidente, el Gerente de Determinación de Derechos Y el Director de Atención y Servicios de Colpensiones, así como frente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda.

**QUINTO:** Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Infórmese de igual modo al juzgado de primer grado.

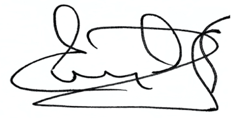
**SEXTO:** Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

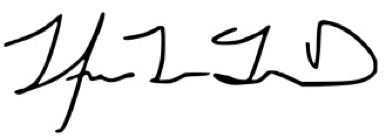
**Con firma electrónica**

**CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS**



**ÁNGEL FRANCISCO GALVIS LUGO**

**Conjuez**



**HÉCTOR JAIME GIRALDO DUQUE**

**Conjuez**

1. Documento 02 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-2)
2. Documento 09 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-3)
3. Documento 10 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-4)
4. Archivo 12 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-5)
5. Folio 39 del archivo 09 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-6)
6. Archivo 04 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-7)
7. Sentencia T-256 de 2019 [↑](#footnote-ref-8)
8. Folios 14 a 18 del documento 1 del cuaderno No. 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sentencia ST2-00093-2021 del 12 de abril de 2021, precedente reiterado en las Sentencias: ST2-0359 del 25 de octubre de 2021 y ST2-0155-2022 del 27 de mayo de 2022 [↑](#footnote-ref-10)
10. Folios 17 a 28 del archivo 09 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-11)
11. Folios 17 a 28 del archivo 09 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-12)
12. Folio 12 del archivo 03 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-13)
13. Folio 39 del archivo 09 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-14)
14. Folios 18 a 25 del archivo 03 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-15)
15. Sentencia ST2-00093-2021 del 12 de abril de 2021. En similar sentido se encuentra en esta misma Corporación: sentencia ST2-0110-2021 del 21 de abril de 2021, sentencia ST2-0163-2021 del 8 de junio de 2021 y sentencia: ST2-0359 del 25 de octubre de 2021. [↑](#footnote-ref-16)